

Título Habilitaciones Lentas: cuando el tiempo es dinero

Tipo de Producto Divulgación

Autores Gunsberg, Alejandro

Código del Proyecto y Título del Proyecto

A17S32 - El laberinto del control: las regulaciones edilicias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Responsable del Proyecto

Mazzina, Constanza

Línea

Políticas Públicas

Área Temática

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Fecha

Noviembre 2017

INSOD

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales

FUNDACIÓN
UADE

Habilitaciones Lentas: cuando el tiempo es dinero

<https://www.cronista.com/columnistas/Habilitaciones-lentas-cuando-el-tiempo-es-dinero-20171006-0087.html>

La expresión “vísteme despacio que estoy apurado” es adjudicada a Napoleón Bonaparte quien solía pronunciarla a su criado mientras, atolondradamente, le abotonaba mal la camisa. La frase también describe los tiempos de la política en donde es preferible analizar y pensar las acciones de modo tal de evitar errores estratégicos o en la implementación de alguna política pública.

En el mundo de los negocios el tiempo se mide desde otra perspectiva. Aquí, la cuestión del tiempo se expresa en la frase en inglés “Time is Money”. La pérdida de tiempo implica un costo de oportunidad que puede traducirse en una demora sustancial en el tiempo de retorno de la inversión o bien en pérdidas de oportunidades respecto de otras inversiones.

¿Qué factores inciden en la pérdida de tiempo y dinero en el ámbito empresarial? Es posible que el error de cálculo empresarial sea un factor importante a la hora de realizar una inversión en la cual el tiempo sea el principal enemigo. También existen otra serie de fenómenos extra empresariales que podrían llamarse factores políticos o de riesgo político.

Como lo señalara Anthony Downs en la década del '60, los gobiernos juegan un rol importante en el mundo económico puesto que son los encargados de aportar un cierto grado de predictibilidad al mercado y, con ello, estabilizar las expectativas de los actores involucrados. En este sentido, el accionar de un gobierno puede reducir sensiblemente los costos de transacción e información alentando las inversiones.

Pero también puede suceder lo contrario y transformarse en un escollo para el mundo empresarial. El índice “doing bussines” mide el costo de tiempo y dinero requerido para iniciar una inversión en un país determinado, es decir, evalúa las regulaciones para hacer negocios. En el indicador realizado por el Banco Mundial, la República Argentina se encuentra en el puesto #116, detrás de países como Tonga (#85), Bhután (#73) y Belice (#112), mientras que Nueva Zelanda encabeza el ranking.

¿Cuáles son los factores que colocan a la Argentina en el puesto 116 sobre 190? En primer lugar, el costo de los permisos de construcción. Estos permisos son onerosos temporal y económicamente. En comparación con Chile, el tiempo necesario para habilitar un permiso de construcción es de medio año más. Incluso, los permisos de construcción en la Argentina duplican la media de América Latina y el Caribe con un tiempo necesario total de 341 días.

A los tiempos requeridos para habilitar una construcción deben añadirse los costos temporales requeridos para la obtención de energía eléctrica. En este caso, según las estadísticas del Banco Mundial en la Argentina se requieren 92 días mientras que en Bélice se requieren de 66 (aproximadamente un mes menos). Una vez finalizados los trámites vinculados con la construcción y la electricidad es preciso contar con aproximadamente un mes adicional para la habilitación comercial.

Las cifras evidencian la discrepancia en cuanto a la percepción temporal de la política y el mundo empresarial. Es cierto que los recaudos temporales, en términos políticos, son en beneficio de evitar riesgos para los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. Pero también es igualmente cierto que los riesgos son un elemento implícito en el mundo empresarial y las malas inversiones y externalidades negativas tienen un correlato en pérdidas económicas.

De aquí surge la necesidad de buscar un punto de equilibrio entre la acción del Estado como protector de los ciudadanos y su rol negativo en relación con los negocios. En este punto, sería importante recordar dos elementos importantes y tal vez dejados a la deriva en un mar de regulaciones: los empresarios son ciudadanos y los gobiernos están al servicio de la ciudadanía.



ALEJANDRO GUNSBURG
Investigador del
Instituto de Ciencias
Sociales de Fundación
UADE. Profesor de la
licenciatura de
Gobierno y Relaciones
Internacionales.